



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**JUZGADO SESENTA Y CUATRO (64)
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ -
SECCION TERCERA**

Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Juez	:	Magda Cristina Castañeda Parra
Medio de control	:	Reparación Directa
Ref. Expediente	:	110013343064-2019-00298-00
Demandante	:	Edward Alfredo Jaramillo Mejía
Demandado	:	Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación.

**REPARACIÓN DIRECTA
RESUELVE EXCEPCIONES PREVIAS**

Encontrándose el expediente al Despacho correspondería a este Juzgado proveer sobre la fijación de la fecha para la audiencia inicial, sino fuese porque el Decreto Legislativo 806 de 2020³⁶ y la Ley 2080 de 2021 establecieron nuevas reglas procesales para la jurisdicción de lo contencioso administrativo, entre otras, en lo que tiene que ver con el trámite de las excepciones; por lo que es necesario definir la aplicabilidad de las nuevas disposiciones procesales al caso en concreto.

ANTECEDENTES

Con la finalidad de ejercer su derecho de contradicción y defensa, las demandadas Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, propusieron las siguientes excepciones previas, a las que más adelante se referirá esta providencia de manera detallada:

En la contestación de la demanda presentada el 19 de abril de 2021, la parte demandada Rama Judicial propuso la excepción previa de **falta de legitimación en la causa por pasiva**. (CD obrante a folio 162-163 CD)

Del mismo modo, en la contestación de la demanda presentada el 20 de abril de 2021, la parte demandada Fiscalía General de la Nación propuso las excepciones previas de **falta de legitimación en la causa por pasiva y caducidad**. (CD obrante a folio 164-165 CD)

CONSIDERACIONES

La versión original del CPACA, en su artículo 180 señalaba, que en el curso de la audiencia inicial, el juez o Magistrado Ponente resolvería «sobre las excepciones previas y las [mixtas] de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva» y, que de requerirse la práctica de pruebas para poder emitir un pronunciamiento al respecto, se suspendería la diligencia para recaudarlas por un término máximo de 10 días, tras el cual se reanudaría la audiencia y se decidiría la respectiva excepción. Así mismo, la norma establecía que el auto que decidiera sobre las excepciones sería susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso.

Éste panorama normativo cambió radicalmente luego de la expedición del Decreto Legislativo 806 de 2020³⁸ y de la Ley 2080 de 2021, como pasa a explicarse:

EL TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES EN EL DECRETO LEY 806 DE 2020.

El artículo 12 del Decreto Ley 806 de 2020 señaló, que durante los dos años siguientes a su expedición, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo las excepciones se tramitarían de la siguiente manera:

«Artículo 12. Resolución de excepciones en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. De las excepciones presentadas se correrá traslado por el término de tres (3) días en la forma regulada en el artículo 110 del Código General del Proceso, o el que lo sustituya. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre ellas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en las excepciones previas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juzgador las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se tramitarán y decidirán en los términos señalados anteriormente.

La providencia que resuelva las excepciones mencionadas deberá ser adoptada en primera instancia por el juez; subsección, sección o sala de conocimiento. Contra esta decisión procederá el recurso apelación, el cual será resuelto por la subsección, sección o sala del tribunal o Consejo de Estado. Cuando esta decisión se profiera en única instancia por los tribunales y Consejo de Estado se decidirá por el magistrado ponente y será suplicable.» (Subrayado fuera del texto).

EL TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES EN LA LEY 2080 DE 2021.

Ahora bien, en lo que respecta al trámite y decisión de las excepciones en el proceso contencioso administrativo, el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, de manera tácita derogó el artículo 12 del Decreto Ley 806 de 2020⁴⁶ antes comentado, y de forma expresa, modificó el artículo 175 del CPACA, para agregarle a éste último un segundo párrafo, del siguiente tenor:

«Artículo 175. Contestación de la demanda. Durante el término de traslado, el demandado tendrá la facultad de contestar la demanda mediante escrito, que contendrá:

(...)

Parágrafo 2º. De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A»

Se insiste, que de acuerdo con la versión original del CPACA, artículo 180, numeral 6, las excepciones previas debían ser resueltas en el marco de la audiencia inicial. Pero, a partir de la expedición de la Ley 2080 de 2021, artículo 38, como viene expuesto, las excepciones previas se decidirán atendiendo al procedimiento establecido en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso, es decir, a través de un auto por escrito, antes de la audiencia inicial.

El caso concreto.

En el presente asunto, se tiene que en vigencia del texto original de la Ley 2080 de 2021 la demanda que origina la presente causa judicial, fue admitida. De otro lado, se tiene que en vigencia de la misma norma, la entidad demandada contestó la demanda; la Secretaría del Despacho dio traslado de las excepciones formuladas por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial al contestar la demanda (fl. 139-165)

Por lo anterior, como quiera que en el proceso de la referencia lo que sigue es la fijación de fecha y hora para la realización de la audiencia inicial, y que no hay términos corriendo, ni trámite o diligencia alguna iniciada que esté pendiente de resolución, al sub judice son perfectamente aplicables las normas de índole procesal previstas en la Ley 2080 de 2021, según el principio del *efecto general inmediato* consagrado en el régimen de vigencia y transición de dicha ley.

Bajo ese parámetro corresponde al Despacho resolver las excepciones previas propuestas por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, antes de la audiencia inicial, a través de auto por escrito en aplicación de las nuevas reglas procesales señaladas en la Ley 2080 de 2021.

Estudio de las excepciones previas en el caso concreto.

-.Falta de legitimación por pasiva propuesta por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial.

Los argumentos de la parte demandada Fiscalía General de la Nación frente a esta excepción fueron los siguientes:

*“Es evidente que el fenómeno de la prescripción de la Acción Penal operó cuando el proceso penal adelantado contra los señores **Edward Alfredo Jaramillo Mejía, Álvaro de Jesús Pertuz Quintero, Álvaro Rojas Ríos y Yeime Shirley Castellanos**, se encontraba en etapa de juicio, en el entendido que fue el señor Juez 49 Penal del Circuito de Bogotá quien la decretó, mediante auto del 27 de junio de 2017.*

Quiere ello significar que, mientras la actuación se adelantó por la Fiscalía General de la Nación, las decisiones tomadas al interior de la misma (desde la Apertura de la Investigación Previa hasta la calificación del mérito del sumario), se surtieron dentro de los estrictos términos procesales, máxime que se encontraban vinculados ciudadanos privados de la libertad, actividad procesal que impidió que operara la prescripción de la acción penal.

*Bajo estas consideraciones, la Fiscalía General de la Nación no propició la ocurrencia de la prescripción de la acción penal, fenómeno jurídico que sí operó **en la etapa de juzgamiento**, tal como lo dio por hecho el Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá.”*

Los argumentos de la parte demandada Rama Judicial frente a esta excepción fueron los siguientes:

“(…) toda vez que tratándose del procedimiento de Ley 600, es facultad de la Fiscalía privar de la libertad a un sujeto en sede de medida de aseguramiento, respecto de la RAMA JUDICIAL en la medida en que no fue ninguna de sus acciones u omisiones la causa inmediata y directa de la privación de la libertad de la cual reprocha el actor.”

Pronunciamiento del Despacho frente a la falta legitimación por pasiva propuesta por las entidades demandadas.

Ha establecido el Consejo de Estado que **“la legitimación en la causa de hecho** alude a la relación procesal existente entre el demandante-legitimado en la causa de hecho por activa y demandado-legitimado en la causa de hecho por pasiva y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá una posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; **la legitimación material**, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño... por consiguiente, **el análisis sobre la legitimación material en la causa contrae a dilucidar si existe, o no,**

relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra.

El Despacho observa que los argumentos planteados por las demandadas Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, en sustento de su solicitud, se encuentran encaminados a desvirtuar la legitimación en la causa material, entendida como la efectiva participación o no en los hechos que generaron los presuntos perjuicios reclamados por la parte demandante, asunto que corresponderá abordar al momento de proferirse sentencia, verificando el material probatorio recaudado, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia del H. Consejo de Estado. Colige el Despacho que la excepción así propuesta por la parte pasiva, no tiene vocación de prosperidad.

Excepción previa de caducidad, propuesta por la Fiscalía General de la Nación.

Los argumentos de la parte demandada Fiscalía General de la Nación frente a esta excepción fueron los siguientes:

*“(...)Pues bien. A la demanda no fue adosada certificación o constancia de ejecutoria del auto dictado el 27 de junio del 2017, por el Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá, mediante el cual se declaró la Prescripción de la Acción Penal, en la actuación radicada con el nro. 2014 - 0260, razón por la que se imposibilita determinar el cómputo de caducidad del medio de control de Reparación Directa incoado por los señores **Edward Alfredo Jaramillo Mejía, Álvaro de Jesús Pertuz Quintero, Álvaro Rojas Ríos y Yeime Shirley Castellanos.**”*

Pronunciamiento del Despacho.

Respecto de la caducidad en acciones de reparación directa, el artículo 164, numeral 2.-, literal i) del C.P.A.C.A. establece lo siguiente:

“Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia” (El despacho resalta.

El Consejo de Estado en reiteradas oportunidades ha establecido que la contabilización del término de caducidad empieza a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad, pues es solo a partir de ese momento que es posible calificar de injusta la detención. Antes no tiene tal calidad, dado que se desconoce la conclusión a la cual llegará el juez penal. Es decir, el daño se consolida, no con el simple hecho material de la detención, sino con la calidad de injusta de ella, la cual deviene como consecuencia de la decisión penal que así lo determine.

En ese orden de ideas, el término de caducidad deberá contarse a partir del 28 de junio de 2017, fecha en la cual quedó ejecutoriada la sentencia donde se declaró la prescripción de la acción penal de las diligencias adelantadas por el delito de rebelión, venciendo los dos años el **28 de junio de 2019.**

No obstante lo anterior, se debe tener en cuenta que si bien, la demanda fue presentada el 17 de septiembre de 2019 (fl. 119), el término de caducidad se suspendió por cuanto la parte demandante presentó solicitud de conciliación el 28 de junio de 2018 al 16 de septiembre de 2018 fecha en la que se declaró fallida la etapa de conciliación prejudicial. (fl. 76-84)

Así las cosas, el Despacho observa que los argumentos planteados por la demandada Nación – Fiscalía General de la Nación, en sustento de su solicitud, se encuentran encaminados a indicar que la parte demandante no tuvo en cuenta el término de caducidad al presentar el medio de control de reparación directa, asunto que en el auto admisorio de la demanda del 12 de febrero de 2021 ya se había evacuado teniendo en cuenta los mismos argumentos explicados en la presente providencia.

Por lo cual el Despacho indica que la excepción así propuesta por la parte pasiva, no tiene vocación de prosperidad.

Por lo anterior el Despacho,

RESUELVE

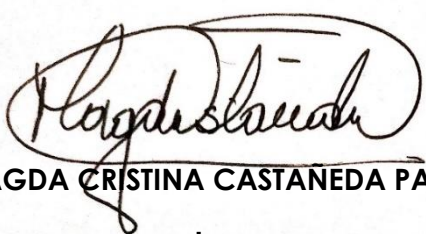
PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA E IMPROSPERA la excepción previa de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por las partes demandadas Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial de conformidad a la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADA E IMPROSPERA la excepción previa de caducidad propuesta por la parte demandada Fiscalía General de la Nación de conformidad a la parte motiva de la presente providencia

TERCERO: Una vez en firme la presente providencia **ingrésese** el expediente al Despacho para fijar fecha y hora de audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011.

CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MAGDA CRISTINA CASTAÑEDA PARRA
Juez